

## Hacia una nueva misión de paz de Brasil en Haití?

por Gabriela LITRE

Una pesadilla absoluta. Así describió el Secretario General de la ONU, António Guterres, la situación que vive actualmente la población haitiana. Guterres expresó lo que parte de la comunidad internacional ya ha estado debatiendo: el envío de una fuerza armada internacional a la nación caribeña.

El prometedor comienzo de Haití como nación nunca llegó a materializarse. La primera nación independiente de América Latina, la primera república negra del mundo y el primer país del hemisferio occidental que abolió la esclavitud es ahora el país más pobre de América, con casi la mitad de la población de 4,7 millones de haitianos pasando hambre aguda.

La población de Haití vive literalmente en una situación desesperada. La última ola de violencia que se ha apoderado del país está marcada por la brutalidad de las bandas que rivalizan entre sí por el control de la capital, Puerto Príncipe. Barrios enteros han sido incendiados, miles de familias han perdido sus hogares y otras están encerradas con miedo a salir, incluso en busca de comida y agua, debido a los secuestros y violaciones en grupo de mujeres y niñas.

En la práctica, el Estado no ejerce ningún poder. Los grupos armados cuentan entre sus líderes con políticos y miembros de las fuerzas policiales. Haití lleva seis años sin celebrar elecciones presidenciales ni legislativas. Desde el asesinato del Presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, no ha habido jefe de Estado. Correspondió al Primer Ministro, Ariel Henry, cuya legitimidad se cuestiona, solicitar ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante este panorama de violencia y ausencia de poder público, la representante de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que su país, junto con México, buscará el apoyo de la ONU para una misión de seguridad que restablezca el orden en el país.

La resolución aún no se ha presentado, en parte porque ningún país ha querido tomar la iniciativa en el proceso. El Gobierno de Joe Biden quiere que sea Brasil quien lidere esta nueva misión, al igual que hizo entre 2004 y 2017, con tropas brasileñas al frente de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).

Estados Unidos ha estado enviando señales ostensibles al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo el 1 de enero de 2023. Poco menos de un mes antes, el 5 de diciembre de 2022, todavía durante el período de transición gubernamental, Lula y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, hablaron sobre la situación en Haití y la propuesta estadounidense de una misión internacional en el país.

También asistieron a la reunión Juan González, Director Principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y Ricardo Zúñiga, Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

### Contradicciones brasileñas

Brasil tiene una larga tradición en tema de fuerzas de mantenimiento de la paz. Pero hoy, el gigante del Sur se encuentra sumido en un mar de contradicciones: ¿Cómo hablar de preservar la paz y seguridad en el exterior, cuando está sumergido en turbulencias y polarizaciones intestinas? La situación política y económica de Brasil es hoy muy diferente de la de 2004. En aquel año, Lula era aún un presidente al principio de su mandato que quería hacer de Brasil un

actor importante en la escena mundial. Liderar una misión de paz en Haití encajaba como un guante en los intereses geopolíticos de Brasil en aquel momento.

Pero tras dejar la presidencia en 2010, Lula sufrió varias acusaciones de corrupción, fue condenado y encarcelado durante 580 días. Posteriormente fue absuelto y liberado, montó un frente amplio de partidos en 2022 y derrotó al presidente Jair Bolsonaro, eligiéndose a sí mismo para un tercer mandato en una epopeya que asombró al mundo.

Lula asumió un nuevo mandato impugnado por amplios sectores de las Fuerzas Armadas, que han mantenido una relación muy estrecha con Bolsonaro, del que han extraído beneficios económicos, como librarse de la reforma de las pensiones y ocupar seis mil cargos en la administración federal.

Una de las manzanas de la discordia entre las Fuerzas Armadas y el Partido de los Trabajadores (PT) es la creación de la Comisión Nacional de la Verdad, que funcionó entre 2011 y 2014, durante el Gobierno de Dilma Rousseff, para investigar los crímenes cometidos por los militares durante la dictadura (1964-1985).

A diferencia de la vecina Argentina, que castigó a los militares, incluso condenando a cadena perpetua al ex dictador Jorge Videla, Brasil no castigó a nadie y en el proceso de transición a la democracia decretó una amnistía que se aplicó a los miembros de organizaciones de izquierda que participaron en la lucha armada contra la dictadura, y también a los militares.

En su informe final, la Comisión Nacional de la Verdad identificó 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante la dictadura, con la implicación de 377 agentes públicos. La Comisión recomendó el castigo de los culpables, así como que las Fuerzas Armadas reconocieran su responsabilidad institucional por la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Los militares nunca aceptaron la iniciativa y encontraron en Bolsonaro, un excapitán del Ejército que fue elegido diputado por apología de la tortura y defensa del régimen militar, la esperanza de volver al poder a través de las urnas.

Una vez en el poder, los militares respaldaron las iniciativas antidemocráticas de Bolsonaro, como una auditoría de las urnas electrónicas, supuestamente amañadas para elegir a Lula. Desde 1996, las elecciones en Brasil se realizan con urnas electrónicas, que nunca han sido objeto de sospecha, salvo por Bolsonaro y sus partidarios.

En el PT, existe el temor de que una nueva misión brasileña en Haití sirva para fortalecer políticamente a los militares. La desconfianza y el malestar entre Lula y las fuerzas armadas aumentaron aún más después de las invasiones y depredaciones de los edificios de la Presidencia, del Congreso Nacional y de la Corte Suprema ocurridas el 8 de enero último.

En el episodio, que pasó a ser conocido mundialmente como el Capitolio brasileño, en alusión a la invasión similar ocurrida hace dos años en Estados Unidos, hay fuertes indicios de la omisión de parte de fuerzas de seguridad y militares.

Durante la invasión, se sugirió a Lula que decretara la Garantía de Orden Público (GLO), operación prevista en la Constitución Federal realizada exclusivamente por orden del Presidente de la República para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas.

Lula se negó porque, tal como lo dice abiertamente, no confía en los militares. En declaraciones, días después de la invasión, dijo a la prensa que estaba convencido de que policías y militares permitieron que los golpistas invadieran la sede del Poder Ejecutivo.

De todas maneras, casi en paralelo y en la primera semana de enero de 2023, las Naciones Unidas nombraron a un general brasileño al mando de una de las mayores misiones de mantenimiento de la paz del mundo, la Misión de la ONU para la Estabilización en la República Democrática del Congo, Monusco. El anuncio lo hizo el miércoles en Nueva York el portavoz de António Guterres. El General Otávio Rodrigues de Miranda Filho sustituirá a otro militar brasileño, el General Marcos de Sá Affonso da Costa, que finaliza su mandato el 28 de febrero.

El primer comandante brasileño de la Monusco fue el general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que también dirigió las tropas de la ONU en Haití con la desaparecida MINUSTAH. Haití y la DR Congo son hoy dos de las misiones de paz más peligrosas del mundo, y Brasil siempre ha tenido un papel protagónico en ellas.

Brasil ocupa uno de los asientos rotatorios del Consejo de Seguridad desde principios de este año y permanecerá con voto en el colegiado hasta finales de 2023. Según el embajador de Brasil ante la ONU, Ronaldo Costa Filho, el gobierno brasileño está a la espera de la presentación de un texto para su evaluación por los demás miembros del Consejo de Seguridad.

Pero además de la cuestión del protagonismo militar y de las negociaciones diplomáticas, el tema económico pesa, y mucho. La prioridad del nuevo gobierno es invertir en políticas sociales. Una misión en Haití exigiría muchos recursos que la administración del PT, que viene de ser inaugurada, no estaría dispuesta a gastar. De 2004 a 2017, las tropas en Haití costaron a las arcas públicas brasileñas 2.600 millones de reales, equivalentes hoy a unos 500 millones de euros.

#### Un Estado en bancarrota

La expresión "Estado en bancarrota" (Estado falido, en portugués) adquirió notoriedad en 1992, en un artículo de los diplomáticos estadounidenses Gerald Helman y Steven Ratner <sup>1</sup>. Según ellos, los Estados fallidos son países incapaces de sostenerse por sí mismos como miembros de la comunidad internacional.

En el Índice de Estados en Bancarrota, elaborado por el Fondo para la Paz en colaboración con la revista Foreign Policy, Haití ocupa actualmente el 11º lugar. Aunque el índice, así como el término Estado en bancarrota, ha sido criticados por basarse en un modelo occidental de Estado e incorporar una visión liberal, lo cierto es que Haití es visto como tal por la comunidad internacional. Y sobre la base de esta evaluación se ha decidido el destino de Haití.

En la década de 1990, Haití se convirtió en uno de los principales laboratorios de la ayuda internacional al desarrollo, implicando a una multiplicidad de actores e intereses externos en la puesta en marcha de servicios públicos básicos, la reestructuración del orden económico y el apoyo a la celebración de elecciones.

Las crisis económicas, sociales y políticas asociadas a las catástrofes naturales han convertido a Haití en escenario de varias misiones humanitarias. Durante la duración de estas misiones, se crea un entorno favorable a la utilización de recursos financieros y humanos procedentes del extranjero para la reconstrucción del país, lo que se traduce en una mejora de los índices de desarrollo económico. Sin embargo, esta ayuda apenas genera beneficios duraderos para el país.

Para Tariq Ali, el concepto de intervención humanitaria se ha convertido en una ideología que oculta los intereses económicos y políticos de las potencias occidentales. Según Pierre Buteau <sup>3</sup>, la ayuda humanitaria se ha convertido en una industria en la que miles de especialistas están formados y operan en estructuras y redes que se activan con cada nueva catástrofe.

Y entonces surge la pregunta: ¿es necesaria una nueva misión en Haití? Desde el punto de vista humanitario, sí, porque el país es incapaz de garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y alimentación a sus habitantes. La segunda pregunta es: ¿conseguirá una nueva misión sus resultados?

#### Referencias

1 - Salvar los Estados en Bancarrota. Gerald B. Helman y Steven R. Ratner. Política Exterior. No. 89 (Invierno, 1992-1993), pp. 3-20 (18 páginas).

2 - ALI, Tariq. La nueva cara del Imperio: conflictos mundiales en el siglo XXI. Río de Janeiro: Ediouro, 2006.

3 - BUTEAU, Pierre; SAINT-ÉLOI, Rodney; TROUILLOT, Lyonel. ¿Refonder Haití? Montreal: Mémoire d'Encrier, 2010.